

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL con ocasión de la conferencia “El problema de las drogas en las Américas: presentación del informe del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza”

Lunes 1 de julio de 2013 Sala Raúl Prebisch

CEPAL, Santiago de Chile

Estimado José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos

Senador Jaime Orpis, que por años ha desplegado un enorme compromiso con la rehabilitación e inserción social

Diputado Carlos Montes, hombre de vasta trayectoria en la lucha por la democracia

Martin Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL

Señoras y Señores representantes diplomáticos

Autoridades Nacionales

Colegas del Sistema de las Naciones Unidas

Colegas de la CEPAL

Amigas y amigos

Sean todos bienvenidos en esta jornada tan singular. Un día de alegría para quienes valoran la democracia y la participación ciudadana como instrumentos irremplazables de la construcción del mejor mañana de nuestra región. Tres millones de chilenos acudieron ayer, voluntariamente, a definir en las urnas a los contendores por el liderazgo de los próximos años. Saludamos con entusiasmo este testimonio de interés y compromiso con los asuntos públicos, esta señal de vitalidad de la democracia chilena, este firme paso por abrir a los ciudadanos las definiciones antes confinadas a unos pocos. Así se construyen caminos amplios a la igualdad.

Es para nosotros un gran honor acoger esta mañana en esta, la casa grande las Naciones Unidas en nuestra región, a un querido amigo y colega infatigable en el quehacer cotidiano por construir escenarios de mejor futuro para nuestras naciones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.

El secretario Insulza dará cuenta en breves minutos más del informe sobre el futuro de la política de drogas en las América, documento elaborado a consecuencia del mandato que los países miembros le entregaron en 2012, en Cartagena, Colombia, en un contexto de frustración en la región con los resultados de la política, que por largos años ha imperado en nuestra región, y referida habitualmente como la guerra contra las drogas.

Queridos amigos, esta discusión, que hace del fenómeno de la droga y sus ramificaciones su foco de atención, resulta oportuna y contingente. Y es que en CEPAL creemos imposible hablar actualmente de desarrollo económico y social sin mencionar el tema de la democracia, así como el de la violencia, especialmente en América Latina y el Caribe. La seguridad en la región ocupa, actualmente, un lugar destacado en las preocupaciones de nuestras autoridades y ciudadanía. Su vínculo lineal con la industria que produce, transporta y comercia la droga resulta ineludible.

En América Latina y el Caribe cuando la gente pide más seguridad, demanda, a la vez, más bienes y servicios públicos, más urbanidad, más tranquilidad. La ciudadanía percibe un fracaso en la política de drogas, y su impacto dramático asociado a la violencia.

Esto implica lograr sociedades más integradas y equitativas. Desde la CEPAL hemos planteado que llegó la hora de la igualdad para la región.

En las calles de nuestros países, con más frecuencia, con más volumen, con más urgencia, se perfila el llamado a cerrar las múltiples brechas que América Latina y el Caribe padece en el campo de la desigualdad, la innovación, la productividad, el empleo, la inversión y la fiscalidad.

Nuestros pueblos nos demandan acometer desafíos que, por cierto, deben contar con renovados pactos sociales. América Latina y el Caribe requiere de una nueva arquitectura pública en la que el Estado garantice un entorno macroeconómico adecuado, promueva cambios en la matriz productiva para incorporar progreso técnico e impulse políticas para reducir las brechas. Un Estado que juegue un rol activo en la reducción de las disparidades territoriales, se comprometa con políticas activas en el ámbito del empleo e intervenga de manera decidida en el plano social para garantizar a los más rezagados y vulnerables un mayor acceso al bienestar y un mayor desarrollo de capacidades.

Seamos claros los países con grandes desigualdades de ingresos tienen más probabilidades de verse afectados por delitos violentos que las sociedades más equitativas. Por el contrario, el crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso, así como una mayor transparencia, contribuyen a evitar los crímenes violentos.

Así como la industria del narcotráfico, la violencia y la delincuencia son causa y consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo. Del mismo modo, la delincuencia y la violencia limitan la democracia y la libertad y reducen la calidad de vida de los habitantes.

Los números son brutales. Nuestra América Latina, con tan sólo 8% de la población mundial registra más del 30% de los homicidios en el mundo. (ACDH -NU, 2010) y un promedio de 25.6 homicidios cada 100.000 habitantes en comparación con los 8.9 de Europa, 3.4 del Pacífico Occidental o 5.8 de Asia Sur-Oriental.

De acuerdo a Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), América Latina es la región del mundo con el mayor índice de homicidios entre jóvenes entre 15 y 24 años. Sostiene esta institución de estudios que "la probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo y 70 veces mayor que las de los jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda".

De acuerdo a las estadísticas de 2009 de la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, una iniciativa diplomática lanzada en 2008, seis de los 14 países más violentos del mundo están en América Latina: El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala y Belice. En estos países los grupos armados, a menudo vinculados al tráfico de droga, provocan estragos.

Las armas de fuego son causante de las crecientes tasas de homicidio en la región. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2011), en 2010, el 42% de los homicidios del mundo fueron cometidos con armas de fuego, mientras que en América la tasa alcanzó a 74% y en Europa 21%. La UNODC indica que los delitos a mano armada están incrementando los delitos violentos en Centroamérica y el Caribe.

A su vez según UNODC (2011) El crimen organizado, especialmente el tráfico de drogas, es responsable de una cuarta parte de las muertes causadas por armas de fuego en las Américas, mientras lo son sólo en el 5% de las de Asia y Europa.

Estos son los desnudos y brutales datos.

La inseguridad en la región, tan influida por el narco, ha conducido a la fragmentación del tejido social, a la segregación y a la exclusión. En el ámbito cultural, la inseguridad ha incidido en el predominio de una cultura autoritaria y de violencia que ha conducido a recurrentes consignas de “mano dura” y “tolerancia cero”. Esta región necesita estrechar manos y aumentar el respeto de unos con otros.

Distintos estudios, entre ellos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, han estimado que el costo de la violencia fluctúa entre el 2% y el 15% del PIB de los países de la región. La mitad de estos costos se refieren a intangibles, es decir, a los efectos de la delincuencia sobre la inversión y la productividad.

Sobre la base de la información disponible de 2006, la CEPAL estimó que los costos económicos de la violencia en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), azotada con protagonismo por la presencia de narcotraficantes, alcanzan el 7,7% del PIB subregional. En estos costos se consideraron los relacionados con las pérdidas en salud, costos institucionales, seguridad pública, justicia, gastos privados en seguridad y pérdidas materiales.

De acuerdo con la CEPAL, entre 2007 y 2010 el gasto público en defensa, seguridad y justicia de Centroamérica, en su conjunto, creció de manera leve pero sostenida. Esta expansión se verifica principalmente en la trilogía tradicional: policía, justicia y prisión.

El gasto de Centroamérica en defensa, seguridad y justicia en 2010 fluctúa entre el 1,7% y el 3,3% del PIB.

Comprometer recursos tan cuantiosos para países donde las necesidades sociales esenciales son tan extensas impone un lastre que no se mide solo en números, sino que tiene un costo con nombres y apellidos, hombres y mujeres de nuestro continente a los que se hipoteca la posibilidad de construir

proyectos de vida satisfactorios. Es por ello que resulta imperativo el compromiso y la colaboración más efectivos entre todas las naciones involucradas en el círculo de la criminalidad.

América Latina y el Caribe tiene que hacer su parte, pero también se necesita trabajar allí donde se genera el grueso de la demanda de drogas ilegales, donde se fabrican y venden la mayoría de las armas de las que disponen las organizaciones delictuales que operan en nuestra región.

Los latinoamericanos queremos paz construida en democracia, con respeto a la dignidad humana.

Hemos aprendido que la protección de nuestras democracias es tarea de todos, así como lo es también que estas produzcan resultados a favor de sus habitantes, muy fundamentalmente, que les brinden paz y progreso social.

Como consigna el propio informe de la OEA que el secretario Insulza nos reseñará “El problema de las drogas afecta a todos los pilares de desarrollo: El productivo, el político, el social y el ambiental. Más aun si se consideran los impactos que ejercen sobre la sociedad los distintos eslabones del problema (producción, tráfico, venta y consumo), como también los costos y efectos asociados al modo en que los Estados enfrentan la situación”.

Estimado José Miguel, la palabra es tuya.

Muchas Gracias